



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
S I N A L O A

Culiacán, Sinaloa, 3 de julio de 2023
Oficio: CEDH/VG-CT/04/2023

Por medio de la presente y de conformidad con lo previsto por los artículos 19, 68 fracciones IV y VI y artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me permito solicitar al Comité de Transparencia de esta Comisión, analice la propuesta de esta Visitaduría General, en el sentido de testar aquellos datos personales clasificados como confidenciales, contenidos en las Recomendaciones 4 y 5 de 2023, emitidas por esta Comisión.

Conforme lo establecen los artículos 22 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia.

Aunado a lo anterior, los artículos 86 y 87 de la Ley mencionada con antelación, indican que es obligación de los sujetos obligados poner a disposición de las personas la información relativa al Título Cuarto de la Ley Local, en los portales oficiales de internet, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia en los formatos de publicación que establezcan los Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

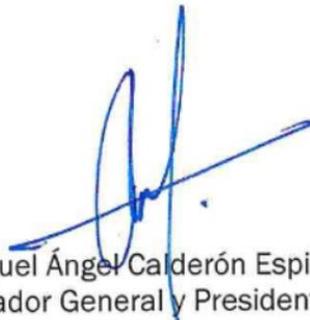
Por su parte, la fracción LTAIPES99FIIA correspondiente a las “Recomendaciones emitidas en materia de derechos humanos”, requiere la publicación de las mismas de manera trimestral.

En ese sentido, dejo a su consideración la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones 4 y 5 de 2023, por contener información concerniente a personas físicas identificadas o identificables tal como lo establece el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.

Por lo anterior, enuncio el listado de datos a testar en los documentos en cuestión.

No. de Recomendación	Datos a testar
4/2023	<ul style="list-style-type: none"> -Nombre del Quejosa/Víctima -Nombres de autoridades responsables -Nombres de servidores públicos -Nombres de testigos -Número de investigación -Número de expediente
5/2023	<ul style="list-style-type: none"> -Nombre del Quejosa/Víctima -Nombres de autoridades responsables -Número de investigación -Número de averiguaciones previas

Atentamente



Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza
 Visitador General y Presidente
 del Comité de Transparencia





COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
S I N A L O A

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia

En la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, siendo las diez horas del día cuatro de julio de dos mil veintitrés, constituidos previa convocatoria los integrantes del Comité de Transparencia de la citada Comisión, Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza; Visitador General, Mtro. Miguel Ángel López Núñez; Secretario Técnico y Lic. Daniela Verdugo Mejía; Directora de Administración, con carácter de Presidente y Vocales respectivamente, en la sala de juntas de este organismo público, ubicada en calle Ruperto L. Paliza 566 Sur en la colonia Miguel Alemán, en esta ciudad, por lo que habiendo quórum legal se reúnen los referidos integrantes del Comité de Transparencia de esta CEDH para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria, con la finalidad de analizar las propuestas realizadas por las distintas áreas que conforman este organismo autónomo constitucional, consistentes en la clasificación de información confidencial contenida en documentos que se generaron durante los meses abril, mayo y junio del año en curso.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

I. PASE LISTA DE ASISTENCIA

El Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General, en su carácter de Presidente de este Comité de Transparencia, cede el uso de la voz al Mtro. Miguel Ángel López Núñez, Secretario Técnico de esta CEDH, para tomar lista de asistencia, quien hace constar que se encuentran presentes todos los integrantes de este Comité.

II. DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Mtro. Miguel Ángel López Núñez, declara que en virtud de que nos encontramos presentes todos los integrantes del Comité, existe quórum legal para sesionar, por lo que el presidente de este Comité declara instalada la sesión.

III. ASUNTOS A TRATAR Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

En este numeral se somete a consideración de los integrantes de este Comité los puntos a tratar en esta sesión:

Pase de lista.

Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión.

Resolución correspondiente a las propuestas contenidas en los oficios con folios número CEDH/DA-CT/04/2023, CEDH/VG-CT/05/2023, OIC/026/2023 y CEDH/UT-CT/04/2023 suscritos por los titulares de algunas áreas que conforman esta institución, por medio de las

cuales solicitan la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales, que se encuentran en documentos generados durante el segundo trimestre del año en curso.

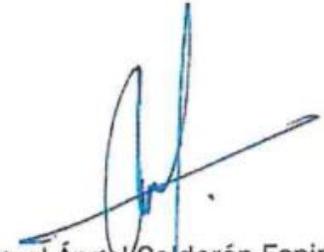
Por UNANIMIDAD se aprueba el orden del día de esta Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

IV. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO CONFIDENCIALES, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE NÚMERO CEDH/CT/10/2023.

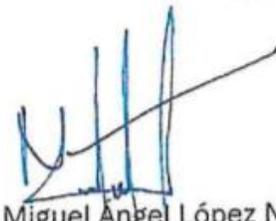
Una vez expuesta la propuesta de resolución del Comité, el Mtro. Miguel Ángel López Núñez recoge los votos y da cuenta de que por UNANIMIDAD se resuelve confirmar la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales, que se detallan en los oficios mencionados con antelación y que se encuentran en documentación generada por las distintas áreas que conforman este organismo estatal durante los meses abril, mayo y junio de 2023.

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Agotados todos los puntos previstos en el orden del día, el Presidente del Comité clausura la sesión, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día 4 de julio de 2023.



Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza
Visitador General y Presidente
del Comité de Transparencia



Mtro. Miguel Ángel López Núñez
Secretario Técnico y Vocal
del Comité de Transparencia



Lic. Daniela Verdugo Mejía
Directora de Administración y
Vocal del Comité de Transparencia





COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
S I N A L O A

EXPEDIENTE NÚMERO: CEDH/CT/10/2023

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a cuatro de julio de dos mil veintitrés.

Analizado el expediente citado al rubro, formado con motivo de la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria de este Comité de Transparencia a efecto de revisar las propuestas realizadas por las distintas áreas que integran esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en materia de clasificación de la información contenida en la documentación generada durante el segundo trimestre del año en curso derivado de sus facultades y atribuciones, este Comité de Transparencia integrado de acuerdo a lo previsto por el artículo 22 fracción I, artículos 61 y 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por el Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General y Presidente de este Comité de Transparencia; Mtro. Miguel Ángel López Núñez, Secretario Técnico de esta CEDH; y Lic. Daniela Verdugo Mejía, Vocales de este Comité, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, emite la presente resolución:

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Las propuestas de referencia fueron presentadas tal como se detalla a continuación:
 - ✓ Oficio no. CEDH/DA-CT/04/2023 de fecha 3 de julio de 2023, suscrito por la Directora de Administración de esta CEDH, en el cual solicita al Comité de Transparencia de esta Comisión el análisis de la propuesta de testar aquellos datos personales clasificados como confidenciales que se encuentran en los contratos de arrendamiento y de adquisiciones así como en un acta de donación de bienes muebles, suscritos por este organismo durante el segundo trimestre de 2023.
 - ✓ Oficio no. CEDH/VG-CT/05/2023 de fecha 3 de julio de 2023, suscrito por el Visitador General de esta CEDH, en el cual somete a consideración de este Comité la clasificación de información confidencial contenida en las Recomendaciones 4 y 5 de 2023 emitidas en este segundo trimestre de 2023.

- ✓ Oficio no. OIC/026/2023 de fecha 3 de julio de 2023, suscrito por el titular del Órgano Interno de Control de esta CEDH, en el que pone a consideración de este Comité la clasificación de los datos personales clasificados como confidenciales que se encuentran en las declaraciones patrimoniales y en las actas de entrega recepción que se generaron durante el segundo trimestre del año en curso.
 - ✓ Oficio no. CEDH/UT-CT/04/2023 de fecha 3 de julio de 2023, en el que la jefa de la Unidad de Transparencia de esta CEDH solicita la clasificación de los datos personales contenidos en los acuses de las solicitudes de acceso a la información pública, los cuales se recibieron durante el segundo trimestre 2023.
2. Recibidos los oficios antes citados, este Comité de Transparencia los integró al expediente en el que se actúa, a efecto de contar con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

II. COMPETENCIA

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 66 fracción II, 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Los titulares de las distintas áreas que conforman esta Comisión Estatal sustentan su petición a través de lo siguiente:

Dirección de Administración:

“(…)

Conforme lo establece el artículo 22 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia.

Aunado a lo anterior, los artículos 86 y 87 de la Ley mencionada con antelación, indican que es obligación de los sujetos obligados poner a disposición de las personas la información relativa al Título Cuarto de la Ley Local, en los portales oficiales de internet, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia en los formatos de publicación que establezcan los Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

En ese sentido, en lo que respecta a la información a publicarse, en este caso la correspondiente a la fracción LTAIPES95FXXIX “Relación de arrendamientos de

bienes inmuebles del sujeto obligado”, LTAIPES95FXXXIB “Donaciones en especie realizadas” y LTAIPES95FXXXIV “Padrón de proveedores y contratistas que incluya dirección, teléfono y giro comercial”, pongo a su consideración la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en los documentos que atienden a estas fracciones, por contener información concerniente a personas físicas identificadas o identificables tal como lo establece el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.

Por lo anterior, enuncio el listado de los contratos sometidos ante el Comité de Transparencia y los datos a testar.

Contrato de arrendamiento	Datos a testar
Instituto Sinaloense de Cultura	-Número de escritura pública -Nombre y número de notario público
Contrato de adquisiciones	Datos a testar
Saúl Iván Rubio Robles	-Número de escrituras públicas -Nombre y número de notario público -Domicilio -Firma de un particular -Datos bancarios
Acta de donación de bienes muebles	Datos a testar
Tribunal Municipal de Barandilla, Guasave, Sinaloa	-Folios de credenciales de elector

En las relatadas consideraciones, solicito al Comité de Transparencia confirme la clasificación confidencial de los datos contenidos en los contratos, de acuerdo a lo previsto por la fracción II del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.

(...)

Del mismo modo, el Visitador General sostiene su petición de la siguiente manera:

(...)

Para efecto de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 95 de la LTAIPES, en este caso particular de la fracción XII sobre *“las solicitudes de acceso a la información pública, las respuestas otorgadas a estas, o en su caso, las respuestas entregadas por los sujetos obligados en*

cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Comisión”, solicito al Comité de Transparencia de este organismo estatal, la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en los acuses de las solicitudes de información recibidas en esta Comisión durante el segundo trimestre del ejercicio 2023, por contener la presunta identidad de algunos solicitantes al incluir el nombre del solicitante o representante y el correo electrónico personal, datos considerados personales tal como lo establece el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.

Conforme lo establecen los artículos 22 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia.

Aunado a lo anterior, los artículos 86 y 87 de la Ley mencionada con antelación, indican que es obligación de los sujetos obligados poner a disposición de las personas la información relativa al Título Cuarto de la Ley Local, en los portales oficiales de internet, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia en los formatos de publicación que establezcan los Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por su parte, la fracción LTAIPES99FIIA correspondiente a las “Recomendaciones emitidas en materia de derechos humanos”, requiere la publicación de las mismas de manera trimestral.

En ese sentido, dejo a su consideración la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones 4 y 5 de 2023, por contener información concerniente a personas físicas identificadas o identificables tal como lo establece el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.

Por lo anterior, enuncio el listado de datos a testar en el documento en cuestión.

No. de Recomendación	Datos a testar
4/2023	<ul style="list-style-type: none"> -Nombre del Quejosa/Víctima -Nombres de autoridades responsables -Nombres de servidores públicos -Nombres de testigos -Número de investigación -Número de expediente

5/2023	-Nombre del Quejosa/Víctima -Nombres de autoridades responsables -Número de investigación -Número de averiguaciones previas
--------	--

(...)"

Por su parte, el titular del Órgano Interno de Control expuso lo siguiente:

"(...)

Conforme lo establecen los artículos 11, 12, 16 y 22 fracción XI de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia.

Aunado a lo anterior, los artículos 86 y 87 de la ley antes citada, indican que es obligación de los sujetos obligados poner a disposición de las personas la información relativa al título cuarto de la referida Ley, en los portales oficiales de internet, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia en los formatos de publicación que establezcan los Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el citado título en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la referida Ley de transparencia.

En ese sentido, en lo que respecta a la información a publicarse señalada en el artículo 95 fracción VIII –Declaraciones de Situación Patrimonial-, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y poder cumplir con su difusión en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal de Internet institucional, solicito la clasificación de los datos considerados como confidenciales, que se encuentran en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de esta Comisión Estatal, quedando dicha clasificación, como sigue:

Apartado	Campo testado
Declaración patrimonial.	
Datos generales.	CURP, RFC, Homoclave, Correo electrónico personal/alterno, Número telefónico de casa, Número celular personal, Situación personal/estado civil, Régimen matrimonial, País de nacimiento, Nacionalidad, Aclaraciones/observaciones
Domicilio del declarante.	Todos los campos.
Datos curriculares del declarante.	Aclaraciones/observaciones.

Apartado	Campo testado
Datos del empleo, cargo o comisión.	Aclaraciones/observaciones.
Experiencia laboral (últimos cinco empleos).	Aclaraciones/observaciones.
Datos de la pareja.	Todos los campos.
Datos del dependiente económico.	Todos los campos.
Ingresos netos del declarante, pareja y/o dependientes económicos.	Ingreso neto de la pareja y/o dependientes económicos después de impuestos, Aclaraciones/observaciones.
¿Te desempeñaste como servidor público en el año inmediato anterior?	Ingreso neto de la pareja y/o dependientes económicos recibido en el año inmediato anterior después de impuestos, Aclaraciones/observaciones.
Bienes inmuebles.	Todos los datos de bienes declarados a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o que sean en copropiedad con el declarante; Tercero, persona física; Transmisor, persona física; Nombre del transmisor de la propiedad; RFC del transmisor; Relación del transmisor de la propiedad con el titular; Datos del Registro Público de la Propiedad; Ubicación del inmueble; Aclaraciones/observaciones.
Vehículos.	Todos los datos de vehículos declarados a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o que sean en copropiedad con el declarante; Transmisor, persona física; Nombre del transmisor; RFC del transmisor; Relación del transmisor del vehículo con el titular; Número de serie o registro; ¿Dónde se encuentra registrado?; Aclaraciones/observaciones.
Bienes muebles.	Todos los datos de los bienes declarados a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o que sean en copropiedad con el declarante; Transmisor, persona física; Nombre del transmisor; RFC del transmisor; Relación del transmisor del mueble con el titular; Tercero, persona física; Aclaraciones/observaciones.
Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores/activos.	Todos los datos de las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores/activos a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros que sean copropiedad con el declarante; Tercero, persona física; Número de cuenta, contrato o póliza; Saldo a la fecha; Aclaraciones/observaciones.
Adeudos/pasivos.	Todos los datos de los adeudos/pasivos a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o que sean en copropiedad con el declarante; Tercero,

Apartado	Campo testado
	persona física; Número de cuenta o contrato; Saldo insoluto; Otorgante del crédito, persona física; Nombre; RFC; Aclaraciones/observaciones.
Préstamo comodato o por terceros.	Ubicación del inmueble; Número de serie o registro; ¿Dónde se encuentra registrado?; Dueño o titular, persona física; Nombre del dueño o titular; RFC; Relación con el dueño o el titular; Aclaraciones/observaciones.
Declaración de intereses.	
Participación en empresas, sociedades o asociaciones (hasta los últimos 2 años).	Todos los datos de la participación en empresas, sociedades o asociaciones de la pareja o dependientes económicos.
¿Participa en la toma de decisiones de alguna de estas instituciones? (hasta los últimos 2 años).	Todos los datos de la participación en alguna de estas instituciones de la pareja o dependientes económicos, Nombre de la institución, RFC, Aclaraciones/observaciones.
Apoyos o beneficios públicos (hasta los últimos 2 años).	Beneficiario del programa cuando no sea el declarante, Aclaraciones/observaciones.
Representación (hasta los últimos 2 años).	Todos los datos de representación de la pareja o dependientes económicos; Representante/representado, persona física; Nombre del representante/representado; RFC del representante/representado; Aclaraciones/observaciones.
Clientes principales (hasta los últimos 2 años).	Todos los clientes principales de la pareja o dependientes económicos; Cliente principal, persona física; Nombre del cliente principal; RFC del cliente principal; Aclaraciones/observaciones.
Beneficios privados (hasta los últimos 2 años).	Otorgante, persona física; Nombre del otorgante; RFC del otorgante; Beneficiario, cuando no sea el declarante; Aclaraciones/observaciones.
Fideicomisos (hasta los últimos 2 años).	Todos los datos de participación en fideicomisos de la pareja o dependientes económicos; Fideicomitente, persona física; Nombre del fideicomitente; RFC del fideicomitente; Fideicomisario, persona física; Nombre del fideicomisario; RFC del fideicomisario; Aclaraciones/observaciones.

A continuación, se detallan los nombres de las personas servidoras públicas que presentaron declaración patrimonial y de intereses durante el **segundo trimestre** del presente año:

#	Nombre de la Persona Servidora Pública
1	Acosta Cabanillas Gladys Angélica
2	Acosta López Brizia
3	Aispuro Zamudio Ismael
4	Álvarez Gutiérrez German Josías
5	Álvarez Ortega Fernando
6	Álvarez Ortega José Carlos
7	Amarillas Sáenz Ana Karina
8	Anistro Castro Gloria María del Carmen
9	Araujo Coronel Juliana
10	Baltazar Leal Julieta
11	Barrón Hernández Adán
12	Beltrán De la Rocha María Fernanda
13	Bernal Beltrán Moisés Alejandro
14	Bernal Gutiérrez Mónica
15	Borrego Gómez Rosario Guadalupe
16	Cabrera Gutiérrez Miguel Antonio
17	Calderón Espinoza Miguel Ángel
18	Carrillo Frías Fernando
19	Castillo Medrano Cristina Lucero
20	Colin Padilla Claudia Lizeth
21	Correa Guerrero Yemcy Nohemí
22	Esquivel Medina Alejandra Monserrat
23	Estévez Jiménez Kevin Alan
24	Félix Cisneros Cesar Eduardo
25	Ferrer López María Elena
26	Flores Cruz José Carlos
27	Fragozo Ontiveros Oscar Eduardo
28	García Campoy Ismael
29	García Mata Karla Patricia
30	García Terrazas Guillermo
31	Gastelum Uribe Martha Yael
32	González Escárcega Metzli
33	Grande Castro Gabriela Dessire
34	Hernández Medina Gaspar Alexander
35	Hernández Ortiz Pavel Jonathan
36	Hernández Torres Orlando
37	Herrera Montoya Yuvia
38	Ibarra Cervantes Erika del Carmen
39	Ibarra Castro Norma Cecilia
40	Iriarte Figueroa Edgard Sinuhe
41	López González Ana Beatriz
42	López Mendoza Alma Leticia

#	Nombre de la Persona Servidora Pública
43	López Núñez Miguel Ángel
44	Malacón Irizar Elizabeth
45	Martínez Calzada Blanca Cristina
46	Medina Jiménez Lilia Zulema
47	Mejía Castro Juan Humberto
48	Mendoza Fuentes Karol Yamileth
49	Mendoza Osuna Reyna Isabel
50	Montoya Peñuelas Erika Margarita
51	Morales Atala Manuel Ignacio
52	Morales Medina Cesar Iván
53	Moreno Valenzuela Lilian Margarita
54	Moreno Verdugo José Javier
55	Noriega López Nancy Raquel
56	Núñez Carrillo Nadia del Rosario
57	Núñez Millán Fermín
58	Páez Jesús Alberto
59	Peña Quevedo Jesús Javier
60	Peñuelas Ponce Cesar Iván
61	Ríos Flores Briant Margarito
62	Rodríguez Domínguez Rebeca
63	Rojas Sáenz José Arturo
64	Ruiz Alanís Julieta Virginia
65	Ruiz León Arsenio
66	Sepúlveda Saucedo María Araceli
67	Soto Zazueta Jesús
68	Tamayo Mascareño Mirna Patricia
69	Urías Beltrán Mario Alejandro
70	Valera Mendoza Adan Alonso
71	Valle Verduzco Vianney Anely
72	Verdugo Mejía Daniela
73	Villa Solís María Trinidad
74	Yanagui Escobosa Jorge
75	Zamudio Beltrán Adelma Pilar
76	Zavala Manzanarez María del Rosario

Se hace entrega de la información anteriormente señalada para los efectos que correspondan respecto a la clasificación confidencial de los datos personales contenidos en las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas de esta Comisión Estatal, y así poder cumplir con su difusión en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal de Internet institucional.

Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, que señala que las declaraciones patrimoniales son públicas, salvo aquellos rubros que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de lo anterior, y con fundamento en los artículos 66 fracción II, 141 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 4 fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, en relación con el Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación.

En cuanto a las **actas de entrega-recepción**, artículo 95 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de igual forma se solicita la clasificación, a raíz de que en los documentos que fueron generados durante el **segundo trimestre del ejercicio 2023**, se encuentran datos personales, por lo que no son susceptibles de publicidad, de conformidad con el artículo 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 4 fracciones XI y XIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, como son:

Apartado	Campo testado
Actas de Entrega Recepción.	
Datos Personales.	folios de credencial de elector, nacionalidad, edad, estado civil, domicilios particulares y lugar de origen.

En este orden de ideas, solicito del Comité de Transparencia confirme la clasificación de los datos personales contenidos en las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de esta Comisión Estatal, así como aquellos que se encuentren en las actas de entrega-recepción que al efecto se generaron durante el **segundo trimestre del ejercicio 2023**.
(...)"

Así mismo, la jefa de la Unidad de Transparencia argumenta que:

"(...)
Conforme lo establecen los artículos 11, 12, 16, 22 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia.

Aunado a lo anterior, los artículos 86 y 87 de la Ley mencionada con antelación, indican que es obligación de los sujetos obligados poner a disposición de las personas la información relativa al Título Cuarto de la Ley Local, en los portales oficiales de internet, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia en los formatos de publicación que establezcan los Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

En ese sentido, en lo que respecta a la información a publicarse del artículo 95 fracción XII sobre “las solicitudes de acceso a la información pública, las respuestas otorgadas a estas, o en su caso, las respuestas entregadas por los sujetos obligados en cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Comisión”, solicito la clasificación de los datos considerados como confidenciales que se encuentran en los acuses de las solicitudes de información recibidas por esta Comisión durante el segundo trimestre del ejercicio 2023, por contener la presunta identidad de los solicitantes.

Por lo anterior, enuncio el listado de solicitudes de información sometidas ante el Comité de Transparencia.

No.	Folio de la solicitud	Datos testados
26	250486100002623	Nombre del solicitante Correo electrónico
27	250486100002723	Nombre del solicitante Correo electrónico
28	250486100002823	Nombre del solicitante Correo electrónico
29	250486100002923	Nombre del solicitante Correo electrónico
30	250486100003023	Nombre del solicitante Correo electrónico
31	250486100003123	Nombre del solicitante Correo electrónico
32	250486100003223	Nombre del solicitante Correo electrónico
33	250486100003323	Nombre del solicitante Correo electrónico
34	250486100003423	Correo electrónico
35	250486100003523	Nombre del solicitante Correo electrónico

36	250486100003623	Nombre del solicitante Correo electrónico
37	250486100003723	Nombre del solicitante Correo electrónico Nombre personal
38	250486100003823	Nombre del solicitante Correo electrónico
39	250486100003923	Nombre del solicitante Correo electrónico
40	250486100004023	Nombre del solicitante Correo electrónico
41	250486100004123	Correo electrónico Nombre personal
42	250486100004223	Correo electrónico
43	250486100004323	Correo electrónico
44	250486100004423	Correo electrónico
45	250486100004523	Nombre del solicitante Correo electrónico
46	250486100004623	Nombre del solicitante Correo electrónico
47	250486100004723	Nombre del solicitante Correo electrónico
48	250486100004823	Nombre del solicitante Correo electrónico Nombres personales
49	250486100004923	Nombre del solicitante Correo electrónico Nombres personales
50	250486100005023	Nombre del solicitante Correo electrónico
51	250486100005123	Nombre del solicitante Correo electrónico
52	250486100005223	Nombre del solicitante Correo electrónico

En las relatadas consideraciones, solicito al Comité de Transparencia confirme la clasificación confidencial de los datos personales contenidos en las citadas solicitudes, de acuerdo a lo previsto por la fracción II del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.
(...)”

SEGUNDO. Los artículos 88 párrafo segundo, y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa establecen respectivamente, que es obligación de los sujetos obligados poner a disposición de las personas la información

a que se refiere el Título Cuarto de la citada ley, en los portales oficiales en internet correspondientes y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en los formatos de publicación que para tal efecto establezcan los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional para asegurar que ésta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable; y que la información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso y deberá permanecer disponible y accesible, atendiendo a las cualidades de la misma, de conformidad con los criterios que para tal efecto emita el Sistema Nacional.

En lo correspondiente a la fracción VIII del artículo 95 de la LTAIPES, ésta señala que los sujetos obligados deberán publicar la versión pública de la declaración patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, y que tiene la obligación de presentar declaración de situación patrimonial en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de conformidad con la normatividad que resulte aplicable en la materia.

Por su parte el artículo 95 fracción XII de la LTAIPES menciona que los sujetos obligados pondrán a disposición del público y actualizarán en forma permanente la información en los respectivos medios electrónicos, en este caso, la relativa a las solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas otorgadas a éstas.

En cuanto a la fracción XV del citado artículo y ley, declara que el acta de entrega recepción es el documento mediante el cual se formaliza un proceso administrativo de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal que debe llevarse a cabo a través de la elaboración del acta administrativa correspondiente y debe actualizarse de manera trimestral.

Por lo que tiene que ver con la fracción XXIX del artículo 95 de la misma ley contempla que todos los sujetos obligados deberán publicar y actualizar de manera trimestral la información relativa a los recursos públicos erogados o utilizados para el pago de arrendamientos de bienes inmuebles, que sean utilizados para sus tareas sustantivas de operación y funcionamiento (oficinas, bodega, estacionamiento, traslado, etc).

En cuanto a la fracción XXXIB, en la LTAIPES está contemplado que su actualización será de manera semestral y en razón de que estamos informando lo relativo al segundo trimestre del año en curso, corresponde publicar la información referente a las donaciones en especie realizadas.

Atendiendo la fracción XXXIV, el periodo de publicación de esta información es trimestral.

En lo referente a la fracción LTAIPES99FIIA correspondiente a las “Recomendaciones emitidas en materia de derechos humanos”, requiere la publicación de las mismas de manera trimestral.

Por otro lado, el artículo 165 establece que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada o

identificable. Para ello, el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, dispone que es un dato personal cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; y que se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, ya sea numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo.

En el mismo sentido, el arábigo y fracción citados en última instancia, establece de manera enunciativa más no limitativa, que una persona es identificada o identificable en cuanto a sus características físicas y los siguientes datos generales: nombre, edad, sexo, estado civil, escolaridad, nacionalidad, número telefónico particular, correo electrónico no oficial, huella dactilar, ADN, número de seguridad social o análogo y Registro Federal de Contribuyente.

Y finalmente, el artículo 155 fracción III de la Ley de Transparencia estatal dispone que la clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la ley.

TERCERO. A partir de lo antes expuesto y tomando en cuenta que a los titulares de las mencionadas áreas administrativas que integran esta Comisión Estatal les corresponde publicar y actualizar la información que refiere el artículo 95 fracciones VIII, XII, XV, XXIX, XXXIB y XXXIV de la LTAIPES, y que en los documentos a registrar (declaraciones patrimoniales, acuses de solicitudes de información, actas de entrega recepción, contratos de arrendamiento, donaciones en especie realizadas y el padrón de contratistas y proveedores), así como el artículo 99 fracción II de la LTAIPES (recomendaciones emitidas en materia de derechos humanos), en los formatos de carga correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2023, se encuentran datos personales como son nombre, correo electrónico personal, RFC, domicilio, CURP, etcétera, resulta procedente CONFIRMAR la declaración de clasificación de la información contenida en los documentos ya mencionados y que fueron generados por las áreas en el ejercicio de sus funciones.

Al momento de elaborar las versiones públicas de los documentos previamente citados en la presente resolución, los titulares de las áreas mencionadas deberán testar sólo aquellos datos personales que en ellos se consignen, en apego a lo previsto en el artículo 165 de la Ley de Transparencia estatal, en relación con el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y de esta manera dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo (AP-CEAIP 04/2021) por el que se modifican los Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como los criterios y formatos contenidos en los anexos de los propios lineamientos, en lo que corresponde al artículo 95 fracción XII de la citada ley,

Lo anterior, con fundamento en los artículos 66 fracción II, 141 y 155 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

IV. RESOLUCIÓN

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se CONFIRMA por unanimidad la clasificación de los datos considerados como confidenciales que se encuentran en las declaraciones patrimoniales, acuses de solicitudes de información, actas de entrega recepción, contratos, acta de donación, contrato de proveedores y en las Recomendaciones que se generaron durante el segundo trimestre de este ejercicio 2023 según lo precisado en los puntos de Consideraciones y Fundamentos de esta resolución, autorizando la elaboración de su versión pública, y dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 95 fracciones VIII, XII, XV, XXIX, XXXIB y XXXIV, así como la fracción II del artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

NOTIFÍQUESE a los titulares de la Dirección de Administración, Órgano Interno de Control, Visitaduría General y Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa para el efecto conducente.

Así lo resolvió el Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 4 de julio de 2023, por unanimidad de votos de sus integrantes, los cuales fueron enunciados al rubro, haciendo constar que a la fecha de la presente resolución no existe nombramiento de Titular de Datos Personales.



Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza
Visitador General y Presidente
del Comité de Transparencia



Mtro. Miguel Ángel López Núñez
Secretario Técnico y Vocal
del Comité de Transparencia



Lic. Daniela Verdugo Mejía
Directora de Administración y
Vocal del Comité de Transparencia



LISTADO DE DATOS TESTADOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXVI, 149, 155, fracción III, 156 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con los numerales trigésimo octavo fracción I, quincuagésimo segundo, sexagésimo segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia con fecha 4 de julio de 2023, se confirmó la clasificación de la información reservada o confidencial del presente documento, a propuesta de la Visitaduría General de esta Comisión Estatal.

 COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SINALOA	Área responsable	Visitaduría General
	Datos testados	-Nombre del Quejosa/Víctima -Nombres de autoridades responsables -Nombres de servidores públicos -Nombres de testigos -Número de investigación -Número de expediente

Se acompaña a este documento la resolución de confidencialidad emitida por el Comité de Transparencia de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELIMINARON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE DEL QUEJOSA/VÍCTIMA, NOMBRES DE AUTORIDADES RESPONSABLES, NOMBRES DE SERVIDORES PÚBLICOS, NOMBRES DE TESTIGOS, NÚMERO DE INVESTIGACIÓN Y NÚMERO DE EXPEDIENTE, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XXVI, 149, 155 FRACCIÓN III, 156 Y 165 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES TRIGÉSIMO OCTAVO FRACCIÓN I, QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO PÁRRAFO SEGUNDO, QUINCUAGÉSIMO TERCERO, QUINCUAGÉSIMO NOVENO, SEXAGÉSIMO SEGUNDO Y SEXAGÉSIMO TERCERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS. PERIODO DE RESERVA PERMANENTE.

Expediente No.: CEDH/IV/VZS/052/2020
Quejoso/Víctima: QV1
Resolución: Recomendación
No. 4/2023
Autoridad
Destinataria: H. Ayuntamiento de
Mazatlán

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 01 de junio de 2023

L.E. Edgar Augusto González Zatarain,
Presidente Municipal de Mazatlán.

1. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, con fundamento en los artículos 1° y 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3°, 4° Bis, 4° Bis C y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 5°, 13° fracciones I, II y III, 22, fracción V, 52, 94, fracción IV, 97, 98, párrafos primero y segundo y 100 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; así como 4°, 6°, 14 fracción V, 92, 93, 96, 97, 98 y 99 de su Reglamento Interior, ha analizado el contenido del expediente número CEDH/IV/VZS/052/2020, relacionado con la queja en la que figura como víctima de violación a derechos humanos QV1.

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 87 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y 10 de su Reglamento Interior. Dichos datos se pondrán en conocimiento de la autoridad recomendada, a través de un listado adjunto en que se describe el significado de las claves utilizadas, previo el compromiso de que ésta dicte las medidas de protección correspondientes.

3. En la presente Recomendación la referencia a distintas dependencias e instancias de gobierno se hará con acrónimos o abreviaturas para facilitar su lectura y evitar su constante repetición, las cuales podrán ser identificadas como sigue:

Nombre de la Institución	Acrónimo
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa	Comisión Estatal
Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán	Secretaría
Tribunal de Barandilla del H. Ayuntamiento de Mazatlán	Tribunal
Fiscalía General del Estado de Sinaloa	Fiscalía

I. Hechos

4. La Comisión Estatal recibió escrito suscrito por QV1, a través del cual denunció presuntas violaciones a derechos humanos en su perjuicio, por lo que se inició el expediente de queja CEDH/IV/VZS/052/2020.

5. En dicho escrito manifestó que fue objeto de abuso policial, ya que el 14 de mayo de 2020, aproximadamente a las 08:15 horas, se encontraba frente a su domicilio realizando sus ejercicios diarios por recomendación médica, ya que padece alto estrés y es diabético, cuando fue interceptado por un policía a bordo de vehículo “reazer”, quien agresivamente y con palabras altisonantes le dijo que no se podía usar el parque y por lo tanto no quería verlo ahí.

6. Asimismo, refirió que posteriormente llegaron más policías y uno de ellos lo tomó del cuello y lo jaló hacia la patrulla, por lo que momentáneamente perdió el conocimiento por la asfixia a la que fue sometido, hasta que lo soltó y cayó al piso golpeándose la rodilla, para posteriormente, una vez que recobró el conocimiento, ser arrastrado por los agentes hasta la caja de una unidad policial, mientras lo golpeaban con las rodillas en la cadera y lo pateaban en las pantorrillas.

7. También, comentó que cuando reaccionó del desmayo se dio cuenta de que su esposa y varias personas estaban grabando lo que ocurría, y una de esas personas les cuestionó a los agentes el motivo de los malos tratos, a lo que ellos contestaron que por resistirse al arresto. Además, esa misma persona les señaló a los agentes, que veía a QV1 muy amarillento y con la boca reseca, por lo que seguramente se le había subido el azúcar; y que su muñeca izquierda estaba inflamada por las esposas, a lo que hicieron caso omiso.

8. Por último, señaló que lo subieron a la unidad policiaca y en el traslado hasta el Tribunal lo amenazaron, diciéndole que si los denunciaba lo iban a matar; que en el Tribunal lo dejaron 10 o 15 minutos en celdas y luego lo dejaron en libertad, pero que no podía caminar de los golpes, por lo que sus familiares y un amigo lo trasladaron a su domicilio.

II. Evidencias

9. Escrito de queja recibido vía correo electrónico ante esta Comisión Estatal el 22 de mayo de 2020, a través del cual QV1 denunció presuntas violaciones a derechos humanos en su perjuicio, por actos que atribuyó a elementos de la Secretaría.

10. Oficio número CEDH/VZS/MAZ/000379 notificado a la autoridad destinataria el 22 de mayo de 2020, a través del cual se solicitó al Secretario de Seguridad Pública un informe relacionado con los actos motivo de la queja.

11. Oficio número 912/2020 recibido ante esta Comisión Estatal el 1 de junio de 2020, a través del cual SP1 informó que existía registro de detención de QV1 el 14 de mayo de 2020, por desobediencia repetitiva a la regla sanitaria local, nacional e internacional, por lo que se actuó en acatamiento al mandato denominado “quédate en casa”, ya que esta persona se encontraba expuesta en peligro de contagio o de cotagiar. Que los agentes que participaron en dicha detención lo fueron AR1 y AR2, quienes lo pusieron a disposición del Tribunal.

12. Oficio número CEDH/VZS/MAZ/000493 notificado a la autoridad destinataria el 02 de agosto de 2020, a través del cual se solicitó a SP2 un informe relacionado con los actos motivo de la queja.

13. Acta circunstanciada de 28 de agosto de 2020 a través de la cual un Visitador Adjunto de ésta Comisión Estatal, hizo constar que QV1 compartió vía WhatsApp 6 videos y 11 fotografías, relacionadas con los hechos denunciados en los que se observa como un agente de policía sujeta del cuello al quejoso y lo conduce con fuerza hasta una unidad policial, además de que civiles presentes le recomiendan que demande, que no se quede callado y le insisten a los agentes que QV1 es una persona diabética.

13.1. Entre las fotografías compartidas obran diversos estudios clínicos realizados a QV1 en mayo y junio de 2020; una hoja de consulta médica de 18 de mayo de ese mismo año, en la que se asienta que acudió el quejoso con antecedentes de golpes por parte de policías, por lo que fue diagnosticado con lordosis columna lumbar, esguince cervical grado 2, listesis L-5, recetándole pastillas, uso de collarín duro durante el tiempo necesario y es canalizado a segundo nivel de atención con traumatología y ortopedia para tratamiento más específico; y, la consulta médica de 23 de julio de 2020 en la que se asienta que se atendió a QV1 el 18 de mayo de 2020 por presentar múltiples contusiones en zona cervical, lumbar, con diagnóstico de lordosis columna lumbar, esguince cervical grado 2 y listesis L-5.

14. Oficio número CEDH/VZS/MAZ/000492 notificado a la autoridad destinataria el 04 de septiembre de 2020, a través del cual se solicitó al SP3 un informe en vía de colaboración relacionado con los actos motivo de la queja.

15. Oficio número TBM/695/2020 recibido ante esta Comisión Estatal el 10 de septiembre de 2020, a través del cual SP3 informó que QV1 fue puesto a su disposición el 14 de mayo de 2020, a las 08:00 horas, y que fue presentado por AR1 y AR2 con motivo de que cometió una infracción al Bando de Policía consistente en alterar el orden público. Para soportar su dicho, el citado servidor público anexó copia de los siguientes documentos:

15.1. Remisión de detenido por infracción con número de folio 4767 de 14 de mayo de 2020, a las 08:00 horas, con motivo de infracciones contra la tranquilidad y seguridad de las personas consistente en alterar el orden público.

15.2. Informe Policial fechado el 14 de mayo de 2020 a las 08:00 horas, a través del cual, en síntesis, narraron que detuvieron a QV1 porque no atendió las indicaciones para no correr sobre el parque lineal.

15.3. Certificado médico con folio 4624 de 14 de mayo de 2020, a través del cual un facultativo adscrito al departamento médico de la Secretaría asentó que al practicar examen médico a QV1, refirió ser diabético y lo encontró con lesiones dérmicas edetomatosas en forma de placas en miembros inferiores y ansioso, y una nota que refería que no podía permanecer en áreas de celdas.

15.4. Boleta de libertad con folio 453674 de 14 de mayo de 2020 a través de la cual se ordenó dejar en libertad a QV1, a las 09:02 horas, con motivo de recomendación médica y sin pago de multa.

16. Oficio número CEDH/VZS/MAZ/000494 notificado a la autoridad destinataria el 14 de septiembre de 2020, a través del cual se solicitó al SP4 un informe en vía de colaboración relacionado con los actos motivo de la queja.

17. Oficio número U.A.I.-S.S.P.-577/2022 recibido ante esta Comisión Estatal el 21 de septiembre de 2020, a través del cual SP4 informó que en esa unidad a su cargo existía registro del Expediente 1, derivado de la queja interpuesta por QV1 el cual se encontraba concluido. Para soportar su dicho, el citado funcionario anexó copia certificada del citado expediente, entre las que figura la siguiente:

17.1. Acuerdo de 26 de junio de 2020 a través del cual se determinó que era procedente la acción administrativa en contra de AR2 y AR3 como responsables de no actuar conforme a los lineamientos que rigen a la institución policial, imponiéndoles una sanción consistente en arresto de 36 horas.

18. Oficio número 6890/2020 recibido ante esta Comisión Estatal el 29 de septiembre de 2020, a través del cual SP2 informó que QV1 interpuso denuncia y/o querrela ante esa unidad a su cargo el 14 de mayo de 2020, iniciándose la Carpeta de Investigación 1, por el delito de abuso de autoridad. Para soportar su dicho, el citado funcionario anexó a su informe copia certificada de los registros contenidos en la señalada carpeta de investigación, entre las que figuran, las siguientes:

18.1. Dictamen con número de folio 2377/2020 de 26 de mayo de 2020, a través del cual un perito médico oficial de la Fiscalía asentó que al examinar a QV1, el 14 de mayo de 2020, éste manifestó que sufrió lesiones en agresión directa y tenía dolor cervical leve y en la rodilla derecha al deambular y que presentaba las siguientes lesiones:

- Esguince leve producido por contusión, localizado en el cuello, caracterizado por el dolor que presenta en el cuello y se aumenta con las maniobras de exploración.

- Esguince leve producido por contusión, localizado en la rodilla derecha, caracterizado por el dolor que manifiesta al deambular.
- El peritaje concluye que QV1 presentaba lesiones que por su naturaleza y localización no ponen en peligro su vida, tardan mas de 15 días en sanar y no dejan consecuencias.

18.2. Informe policial de 14 de mayo de 2020, a través del cual AR2 y AR3 informaron al titular de la Secretaría que participaron en la detención de QV1, quienes refirieron que fueron insultados y agredidos verbalmente por éste, cuando lo invitaron a retirarse a su domicilio como medida para resguardar la salud pública con motivo de la pandemia.

18.3. Declaración testimonial de T1 rendida ante la Fiscalía el 09 de septiembre de 2020, quien dijo que el 14 de mayo de 2020, aproximadamente a las 08:15 horas, se encontraba en su lugar de trabajo cuando observó que un agente de policía sujetó del cuello a QV1 y otros lo sujetaron de los brazos para llevarlo hasta una patrulla, y que en ese momento llegó una persona y lo soltaron, por lo que QV1 cayó al suelo un poco asfixiado, pero aun así los agentes le exigían que se subiera a la patrulla, pero éste no podía porque estaba lastimado de las rodillas y le faltaba el oxígeno.

18.4. Declaración testimonial de T2 rendida ante la Fiscalía el 09 de septiembre de 2020, quien dijo que el 14 de mayo de 2020, aproximadamente a las 08:15 horas, observó cómo los agentes de policía sujetaron del cuello y golpearon a QV1 y que éste se estaba ahogando ya que no podía agarrar aire.

19. Oficio número CEDH/VZS/MAZ/000233 notificado a la autoridad destinataria el 08 de marzo de 2023, a través del cual se solicitó a SP5 un informe en vía de colaboración relacionado con los actos motivo de la queja.

20. Oficio con folio número 62/2023 recibido ante esta Comisión Estatal el 02 de mayo de 2023, a través del cual SP5 informó que la Carpeta de Investigación 1 fue judicializada el 22 de marzo de 2023, iniciándose la correspondiente causa penal; y que se llevó a cabo audiencia inicial el 24 de abril de 2023, en la cual se formuló imputación y se vinculó a proceso a AR2 y AR3 por los delitos de abuso de autoridad y lesiones dolosas.

III. Situación Jurídica

21. En el caso que nos ocupa, QV1 fue detenido en la vía pública el día 14 de mayo de 2020, aproximadamente a las 08:15 horas, por elementos de la Secretaría, con motivo de presuntamente haber cometido una falta administrativa al Bando de Policía y Gobierno de Mazatlán.

22. Posterior a su detención, los agentes policiales trasladaron a QV1 al Tribunal, lugar en el que permaneció por espacio de una hora y fue dejado en libertad por recomendación médica y sin pago de multa.

23. Al momento de su detención QV1 fue objeto de agresión física que dejaron secuelas en su integridad corporal, lo cual quedó debidamente documentado en el expediente de queja que se analiza.

24. Tales acciones llevadas a cabo por las autoridades señaladas como responsables, en perjuicio de la integridad física de la señalada víctima, materializan las violaciones a sus derechos humanos que por esta vía se les reprocha.

IV. Observaciones

25. Es pertinente recordar que cada una de las resoluciones que esta Comisión Estatal realiza, deja claro que no se opone a la investigación y persecución de los delitos, tampoco a la imposición de sanciones por las faltas o infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía por parte de las autoridades competentes.

26. Igualmente se ha dejado claro que a este organismo no le compete investigar respecto de las conductas infractoras de reglamentos gubernativos y de policía presuntamente desplegadas por la señalada víctima, según las imputaciones formuladas en su contra por la autoridad que efectuó su detención y tampoco se pronunciará al respecto, ya que esto resulta en competencia exclusiva de las autoridades encargadas de la impartición de justicia administrativa en el municipio.

27. En consecuencia, el pronunciamiento de esta Comisión Estatal únicamente analizará en relación con la responsabilidad derivada de violaciones a derechos humanos, verificando si las autoridades en materia de seguridad pública que intervinieron en los hechos motivo de la queja, llevaron a cabo los procedimientos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y si fueron respetuosas de los derechos humanos.

Derechos humanos violentados: A la integridad física y a la seguridad personal.

Hecho violatorio acreditado: Lesiones.

28. Previo a entrar a desarrollar el presente apartado, se cita el concepto de derecho a la integridad y seguridad personal:

“Es la prerrogativa que tiene toda persona a no sufrir actuaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisonómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.”¹

¹ Soberanes, José Luis et al. “Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos”¹. Editorial Porrúa México, 2015, Comisión Nacional de los Derechos Humanos Sinaloa.

29. Así entonces, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

30. En términos similares se pronuncian los diversos 1° y 4° Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, al establecer que el Estado tiene como fundamento y objetivo último, la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales que le son inherentes, los cuales vinculan a todos los poderes públicos.

31. En ese sentido, al ser una obligación gubernamental el respetar los derechos humanos de toda persona, resulta en un imperativo para esta Comisión, hacer un análisis de la conducta de acción desplegada por las autoridades señaladas como responsables en la presente resolución que, como quedó acreditado, causaron las lesiones ya descritas a QV1, así como de las disposiciones específicas que violentaron.

32. En relación a la queja que nos ocupa, a juicio de esta Comisión Estatal, ha quedado acreditado que la señalada víctima de violación a derechos humanos identificada con la clave QV1, fue objeto de maltrato físico por parte de los agentes policiacos que efectuaron su detención, al causarle lesiones diversas en su economía corporal.

33. Lo anterior esa así, ya que la víctima alegó a través de su escrito de queja haber sido objeto de agresión física durante su detención por parte de la autoridad policial, por lo que esta Comisión Estatal inició la investigación correspondiente de la cual se desprende lo siguiente:

34. Que, posterior a su detención, QV1 fue valorado por un facultativo adscrito al departamento médico de la Secretaría, quien dio cuenta de lesiones dérmicas edetomatosas en forma de placas en miembros inferiores y ancioso y una nota que refería que no podía permanecer en áreas de celdas.

35. Asimismo, obra dentro del expediente el dictamen médico de lesiones con número de folio 2377/2020 de 26 de mayo de 2020, a través del cual un perito médico oficial de la Fiscalía asentó que al examinar a QV1, el 14 de mayo de 2020, éste manifestó que sufrió lesiones en agresión directa y tenía dolor cervical leve y en la rodilla derecha al deambular, y que presentaba las siguientes lesiones: esguince leve producido por contusión, localizado en el cuello, caracterizado por el dolor que presenta en el cuello y se aumenta con las maniobras de exploración; esguince leve producido por contusión, localizado en la rodilla derecha, caracterizado por el dolor que manifiesta al deambular. El

peritaje concluyó que QV1 presentaba lesiones que por su naturaleza y localización no ponen en peligro su vida, tardan más de 15 días en sanar y no dejan consecuencias.

36. Asimismo, de los estudios clínicos que se realizó el aquí quejoso y que quedaron detallados en el párrafo 10, se desprende que fue diagnosticado con lordosis columna lumbar, esguince cervical grado 2 y listesis L-5, recetándole uso de collarín duro durante el tiempo necesario y es canalizado a segundo nivel de atención con traumatología y ortopedia para tratamiento más específico.

37. Además de lo anteriormente descrito, se cuenta con la declaración de T1 y T2, así como de los testigos presenciales de los hechos, quienes coincidieron en señalar que observaron cómo los agentes de policía sujetaron del cuello, sometieron y golpearon a QV1 al momento de la detención, por lo que se considera que en el caso existen elementos suficientes para tener por acreditado que la señalada víctima fue violentado en su derecho humano a la integridad física durante su detención como éste lo afirma.

38. También, se allegó al expediente 6 videos y 11 fotografías, relacionadas con los hechos denunciados en los que se observa como un agente de policía sujeta del cuello al quejoso y lo conduce con fuerza hasta una unidad policial.

39. En tal virtud, resultan sumamente preocupantes los acontecimientos registrados en el presente caso, es decir, que posterior a ocurrida la detención, la víctima haya presentado múltiples lesiones en su integridad corporal, entre las que figuran esguinces en cuello y rodilla, así como que el cirujano adscrito al Departamento Médico de la Secretaría estableciera en el dictamen que elaboró, una nota donde señalaba que éste no podía permanecer en el área de celdas.

40. Es preciso señalar que AR2 y AR3 señalaron en el informe policial que “el sujeto se devolvió al parque lineal sin dejar de insultarnos y agredirnos verbalmente y fue en ese momento que empuja a mi compañero (...), motivo por el cual se le tomó la mano derecha para sujetarlo que no siguiera agrediéndonos y el policía (...) le toma la mano izquierda para subirlo en la cabina de la patrulla”, sin embargo, de las evidencias recabadas por esta Comisión Estatal, particularmente el video descrito en el párrafo 10, se desprende que además de sujetar al quejoso de sus extremidades superiores, también lo sujetaron el cuello.

41. Al respecto, esta Comisión Estatal ya se ha pronunciado en otras oportunidades respecto la prohibición del uso de la violencia, salvo las excepciones de legítima defensa y la ejercida por autoridades para salvaguardar el orden público.

42. Si bien es cierto, los agentes policiales que intervinieron en los hechos que ahora nos ocupan, están facultados por ley para hacer uso de la fuerza pública para someter a las personas, también lo es que esa fuerza no es ilimitada ni

queda al arbitrio de quien detenta el poder, sino que debe ser moderada y adecuada a las circunstancias propias del caso.

43. Así pues, en el presente caso quedó plenamente acreditado que QV1 fue violentado en su derecho humano a la integridad física y seguridad personal, el cual se encuentra reconocido y protegido por los artículos 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por diversos instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado de conformidad con el artículo 133 de la citada Constitución, tales como:

- **Convención Americana sobre Derechos Humanos:**
“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. *Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.”*

- **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:**
“Artículo 10.
1. *Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”*

- **Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión:**
“Principio 1. Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

- **Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley:**
“Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

Artículo 3. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.”

44. Tales preceptos, indudablemente fueron violentados por las autoridades señaladas como responsables en la presente resolución, quienes ejercieron violencia física en contra de QV1, durante el tiempo que permaneció bajo su custodia.

45. Del mismo modo, en el caso se violentó lo previsto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus artículos 40, fracciones I, VI, IX y 100, claramente establecen la obligación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, de velar por la vida e integridad física de las personas, así como la salvaguarda de sus derechos humanos.

46. Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en similares términos que el anterior, establece la obligación de los elementos integrantes de las diversas corporaciones policiales, según los artículos 5, fracción I; 22, fracción II y 31, fracción IX, los cuales fueron violentados con su actuar.

47. Del mismo modo, violentaron lo previsto por los artículos 94, fracciones II, XVIII, XXII y 102, fracción XVII, del Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa, que se pronuncian en términos similares.

48. Tales cuerpos normativos de los tres órdenes de gobierno, regulan de manera específica la función de seguridad pública y establecen los deberes mínimos que las instituciones policiales deben observar en el desempeño de sus funciones, entre las que figuran el deber ineludible de velar por la vida e integridad física de las personas desde el momento de su detención y la estricta prohibición para los agentes de la Secretaría de maltratar a los detenidos en cualquier momento, sea cual fuere la falta o delito que se les impute, además de la obligación de abstenerse en todo momento de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes.

49. Por último, es preciso traer a colación lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Cabrera García y Montiel Flores vs. México*, en el sentido de que “el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. La jurisprudencia de este Tribunal también ha señalado que siempre que una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al estado proveer una explicación creíble de esa situación. En consecuencia, existe la presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados”.²

50. Con base en lo anteriormente expuesto y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en nuestra entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo 4º Bis, segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa de manera respetuosa se permite formular a usted, señor Presidente Municipal de Mazatlán, las siguientes:

² Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Párrafo 134.

V. Recomendaciones

Primera. Realice las gestiones necesarias para que se proceda a la reparación integral del daño de QV1 en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, remitiendo a esta Comisión Estatal las pruebas de su cumplimiento.

Segunda. Gire instrucciones a quien corresponda para que se diseñen e impartan cursos de capacitación a AR1, AR2 y AR3 y demás agentes de la Secretaría, para evitar que se vuelva a incurrir en violaciones a derechos humanos como las que dieron origen a la presente Recomendación, remitiendo a esta Comisión Estatal pruebas de su cumplimiento.

Tercera. Como medida de no repetición, se dé a conocer el contenido de la presente Recomendación entre el personal de la Secretaría, ello con el ánimo de evitar la repetición de los actos similares a los que por esta vía se reprocha, remitiendo a esta Comisión Estatal pruebas de su cumplimiento.

VI. Notificación y Apercibimiento

51. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

52. Notifíquese al L.E. Edgar Augusto González Zatarain, Presidente Municipal de Mazatlán, de la presente Recomendación, misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número **4/2023**, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma con firma autógrafa del suscrito.

53. Que de conformidad con lo sustentado por el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día hábil siguiente de aquel en que se haga la notificación respectiva, manifiesten a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándole expresamente que en caso negativo, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

54. Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución lo mismo la General de la República, que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

55. También se les hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio de 2011.

56. En ese sentido, el artículo 1° y 102, apartado B, segundo párrafo de la misma, señalan lo siguiente:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Artículo 102. (...)

B. (...)

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

(...)

57. En consecuencia, aquellas autoridades a quienes se les dirija una Recomendación de parte de esta autoridad constitucional en derechos humanos, deben constreñirse a señalar que tiene por aceptada o no dicha Recomendación, más no señalar que la aceptan parcialmente.

58. En ese sentido, tanto la no aceptación como la aceptación parcial, se considera como una negación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 1° y 77 Bis de la Constitución Política del Estado, ya que se traduce en la no aceptación del mencionado pronunciamiento.

59. Esta posible actitud de la autoridad destinataria evidenciaría una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra también el desprecio a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1° de la Constitución Nacional.

60. En este orden de ideas, las recomendaciones emitidas por los organismos públicos de protección de los derechos humanos del país, requieren, además de la buena voluntad, disposición política y mejores esfuerzos de las autoridades a quienes se dirigen, ser aceptadas y cumplidas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en el párrafo tercero, del multicitado artículo 1o constitucional.

61. Es importante mencionar que de conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las Recomendaciones no son vinculatorias, pero una vez aceptadas, la autoridad o servidor público está obligado a cumplirlas en sus términos, en atención al respeto y cumplimiento de los derechos humanos que constitucionalmente les exige.

62. Ahora bien, de conformidad con lo sustentado por el artículo 98, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, en caso de aceptación de la presente Recomendación, deberá entregar dentro de los quince días adicionales las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

63. La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

64. Notifíquese a QV1 en su calidad de víctima dentro de la presente Recomendación, remitiéndosele con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del suscrito, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
Presidente